

**S E S I Ó N   P Ú B L I C A   NÚM. 8**  
**O R D I N A R I A**  
**MARTES 19 DE ENERO DE 2010**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con treinta y ocho minutos del martes diecinueve de enero de dos mil diez, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar Sesión Pública Ordinaria, los señores Ministros Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales y Sergio A. Valls Hernández. Los señores Ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza se incorporaron una vez iniciada la sesión.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I.      APROBACIÓN DE ACTA**

Proyecto de acta de la Sesión Pública número Siete, Ordinaria, celebrada el lunes dieciocho de enero de dos mil diez.

Por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar

Sesión Pública Núm. 8

Martes 19 de enero de 2010

Morales y Valls Hernández, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

## II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Ordinaria para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del martes diecinueve de enero de dos mil diez:

### III. 39/2009 Y SU ACUMULAD A 41/2009

Acción de inconstitucionalidad números 39/2009 y su acumulada 41/2009, promovida por el Partido de la Revolución Democrática y el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Quintana Roo en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la propia entidad federativa, demandando la invalidez de los Decretos 100, 097, 093, 098 y 094 por los que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política, de la Ley Electoral, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral y de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, todas del Estado de Quintana Roo. En el proyecto formulado por el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, se proponía: *“PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 39/2009 a que esta resolución se refiere. SEGUNDO. Se sobresee en las presentes acciones respecto de los artículos 49 y 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y 88, fracción VIII y 89 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral, ambos del Estado de Quintana Roo.*

Sesión Pública Núm. 8

Martes 19 de enero de 2010

*TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 49, fracciones II, última parte y III, numeral 6, última parte, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, 74, 81, 109, fracción I, inciso b) y 144 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo. CUARTO. Se reconoce la validez en términos de la interpretación conforme que se señala en el considerando séptimo de la presente resolución, del artículo 137, párrafos tercero y cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo. QUINTO. Se declara la invalidez de los artículos Segundo y Noveno Transitorios del “Decreto número 100” por el que se reformaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; así como de la fracción II, del artículo 87, en la porción normativa que señala: “para precampañas y campañas” y del párrafo segundo del artículo 271 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo. SEXTO. Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Quintana Roo consistente en regular de manera deficiente, los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en el ámbito jurisdiccional prevista en el inciso I) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución General de la República. En consecuencia el órgano legislativo de esa entidad federativa deberá legislar a la brevedad posible, para corregir la deficiencia apuntada, antes de la celebración de la jornada electoral estatal. SÉPTIMO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el*

*Sesión Pública Núm. 8*

*Martes 19 de enero de 2010*

*Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo”.*

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la estimación del Tribunal Pleno el considerando Décimo “OMISIÓN DE ESTABLECER: LAS REGLAS PARA LLEVAR A CABO EL RECUENTO DE VOTOS EN LOS ÁMBITOS ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y, LA OBLIGACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA CELEBRAR CONVENIOS CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL” (páginas de la doscientos siete a la doscientos veinticinco), en cuanto sustenta la propuesta contenida en el punto resolutivo Sexto de declarar procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad presentada por el partido promovente consistente en regular de manera deficiente en esa entidad, los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en el ámbito jurisdiccional prevista en el inciso I) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución General de la República.

El señor Ministro Gudiño Pelayo precisó las consideraciones que sustentan el sentido del proyecto y agregó que quedaba pendiente el análisis relativo a la omisión de establecer reglas para llevar a cabo el recuento de votos en el ámbito jurisdiccional con motivo de las reformas a la Ley Estatal de Medios de Impugnación.

Agregó que el accionante aduce en sus conceptos de invalidez que los numerales impugnados vulneran lo previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso i) de la Constitución Federal además, de que no se incluyeron las reglas relativas para el recuento de votos en el ámbito administrativo y jurisdiccional.

Señaló que el proyecto propone declarar fundado el respectivo concepto de invalidez por lo que hace a la falta de supuestos y reglas para los recuentos parciales o totales en sede jurisdiccional toda vez que la legislación respectiva no prevé la hipótesis de los recuentos parciales y totales en sede jurisdiccional.

En relación con lo manifestado por el señor Ministro Franco González Salas respecto a la publicación del Decreto 165 porque se reforman, adicionan y derogan diversos preceptos de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, destacando la división del artículo 18 Bis y la reforma a la fracción IV, del artículo 50, señaló que la reforma y adición mencionada afectan en menor medida la propuesta del proyecto y, de aceptarlo este Tribunal Pleno, se incorporaría a éste toda vez que la adición al artículo 38 Bis, únicamente señala la vía en la que se atenderá la pretensión del nuevo escrutinio, el cómputo de las elecciones que será la vía incidental y los casos de procedencia e improcedencia de dicha vía, lo que deberá establecer el Tribunal Electoral al resolverlo, así como las

previsiones en el caso de que el resultado del nuevo escrutinio y cómputo modifique los resultados.

Además, en relación con el diverso artículo 50, fracción IV, impugnado que prevé que la sentencia de fondo que recaiga en los juicios de nulidad, podrá tener como efecto entre otros, modificar los cómputos estatal y distrital de la elección de gobernador, los distritos de la elección de diputados de mayoría relativa y los municipales para la elección de miembros de los ayuntamientos cuando sean impugnados por error aritmético, o bien por el recuento del sufragio en que se hubiese efectuado, por mandato constitucional derivado de la reforma federal en materia electoral las Constituciones y Leyes de los Estados, deben garantizar que se señalen los supuestos y las reglas para la realización en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación, ya que se advierte que con dicha reforma no se subsana la falta de reglas para los recuentos parciales o totales en sede jurisdiccional, pues si bien se establecen supuestos de procedencia, no se establece regla alguna para llevar a cabo los recuentos de votos.

Por tanto, propuso determinar que resulta procedente y fundada la respectiva acción de inconstitucionalidad y modificar el proyecto en cuanto a la consideración relativa a que no se señalan los supuestos para los recuentos señalados.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea indicó que a su juicio sí es procedente tanto la acción de inconstitucionalidad como la controversia constitucional para impugnar omisiones legislativas; sin embargo, en el caso concreto estimó que mediante el Decreto 165 se ha purgado la omisión legislativa que se impugna en este asunto, ya que están dadas todas las condiciones para que procedan los recuentos de votos en sede jurisdiccional.

Además, consideró que en todo caso podría presentar vicios el nuevo acto legislativo, como podría ser el relativo a la limitación de que el recuento en vía jurisdiccional se dé únicamente cuando no ha procedido en vía administrativa, sin embargo en esta acción no puede ser materia de análisis el contenido del referido Decreto.

Recordó que la omisión legislativa se genera al haber una incorrecta o deficiente reglamentación; por lo que en el caso concreto, se encuentra subsanada.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó estar en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra omisiones legislativas, por lo que el concepto respectivo debería declararse inoperante; además, consideró compartir los argumentos de los señores Ministros Franco González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea en cuanto a que la respectiva omisión legislativa ha quedado sin efectos.

Agregó estar de acuerdo con el proyecto en cuanto a que es infundada la omisión legislativa relativa al recuento de votos en sede administrativa.

El señor Ministro Aguilar Morales indicó estar de acuerdo con lo señalado por el señor Ministro Gudiño Pelayo ya que la omisión legislativa parcial implica una deficiencia en la regulación dentro de la propia ley, sin que pueda llegarse a sostener que una omisión está purgada por un nuevo acto legislativo sin analizar detenidamente su contenido.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que en el documento elaborado por el señor Ministro Gudiño Pelayo se distingue entre los supuestos y las reglas para llevar a cabo los recuentos en sede jurisdiccional. En ese orden estimó dudoso sostener que el nuevo acto legislativo contemple tanto los supuestos como las reglas en comento, pues si bien se presentan aquéllos lo cierto es que no se establecen las reglas aplicables, debiendo preverse éstas en virtud del mandato constitucional respectivo, al no ser una cuestión menor llevar a cabo recuentos que pueden provocar la nulidad de una elección. Por ende, consideró que las modificaciones realizadas por el legislador del Estado no colman la respectiva omisión legislativa.

El señor Ministro Franco González Salas estimó necesario establecer estándares de jurisprudencia sobre qué



se entiende por reglas para llevar a cabo los recuentos en sede jurisdiccional, ya que en el caso concreto se prevé en vía incidental, señalando las causas por las que se puede solicitar el recuento, es decir los supuestos básicos para determinar en qué casos se dará un recuento parcial o total.

Agregó que el Pleno de este Alto Tribunal no puede imponer más reglas de las necesarias, estando clara la vía y diversos mínimos razonables para considerar que el Estado cumplió con la Constitución General, escapando al juicio de ponderación que toca a esta Suprema Corte analizar con mayor profundidad el tema en comento.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia consideró que se trata de un sistema abierto que no señala las causas en que procede el recuento de votos, lo que queda en manos del tribunal. Estimó que resulta preocupante el tema relativo al recuento de votos en sede administrativa, ya que de los preceptos transcritos en la foja doscientos once y siguientes del proyecto no se advierte la previsión de las reglas del recuento sino para el cómputo de votos, pues solamente se autoriza de oficio a volver a contar los votos en las casillas en que aparezcan alteradas las actas.

Precisó lo indicado en los artículos 225, 226, 231, 232 y 250 del ordenamiento impugnado, señalando que en ninguno de ellos se hace referencia al “recuento” de votos, el

*Sesión Pública Núm. 8*

*Martes 19 de enero de 2010*

cual tiene un sentido muy diferente al “cómputo” o “escrutinio”.

Consideró que en la vía administrativa no se dio una regulación de los supuestos y reglas para llevar a cabo un recuento de votos en esta sede.

El señor Ministro Aguilar Morales estimó que al existir la omisión respecto del recuento de votos en sede administrativa se torna de mayor gravedad la deficiencia de la regulación de los recuentos en sede jurisdiccional. Agregó que los artículos 38 bis y 50 del ordenamiento impugnado de ninguna manera subsanan la respectiva omisión legislativa, sino que debía establecerse con claridad que aun con dichas reformas, no se subsanan ni se establecen las reglas o los supuestos necesarios para llevar a cabo los recuentos parciales y totales de votos.

El señor Ministro Franco González Salas manifestó que un nuevo escrutinio y cómputo de votos, implica necesariamente un recuento de éstos. Además, estimó que el sistema se construyó sobre la base de un recuento realizado previamente en el ámbito administrativo, señaló que si bien el sistema no se construyó de la mejor manera por el legislador local, lo cierto es que las normas impugnadas obligan a llevar a cabo los recuentos respectivos y de no realizarse adecuadamente operará el sistema de impugnación ante la jurisdicción electoral. Indicó

ser innecesario que la norma se refiera al recuento de votos pues ello está implícito al referirse al cómputo de votos.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia indicó no advertir en qué norma se prevé el recuento total en sede administrativa, ante lo cual el señor Ministro Franco González Salas manifestó que no se encuentra regulado expresamente.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia recordó que en otras legislaciones además de regularse el cómputo de votos se prevén los sistemas de recuento.

La señora Ministra Luna Ramos dio lectura a lo previsto en la fracción II del artículo 232 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo con base en lo cual estimó se refiere tanto al procedimiento normal de cómputo como al recuento y nuevo cómputo del acta respectiva.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que la norma referida regula el cómputo dentro del proceso ordinario.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia recordó que en otras legislaciones se prevén los supuestos en los cuales se debe llevar a cabo el recuento, con independencia del proceso de cómputo ordinario.

El señor Ministro Franco González Salas manifestó que modificará su postura considerando que el sistema impugnado es violatorio del principio de certeza, en tanto que no contiene reglas claras sobre los procedimientos de recuento parcial o total de votos tanto en sede administrativa como jurisdiccional, sin que ello modifique su criterio en cuanto a que el Pleno únicamente puede exigir reglas mínimas razonables para cumplir con la norma constitucional.

El señor Ministro Presidente señaló la importancia de establecer las reglas mínimas para el recuento de votos consistentes en determinar los casos en los que procedería el recuento parcial y el recuento total, así como quiénes y cuándo pueden solicitarlos.

El señor Ministro Cossío Díaz recordó la importancia de establecer la mecánica del recuento de los votos.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que lo impugnado es la omisión legislativa en cuanto a los puntos indicados por los señores Ministros Presidente Ortiz Mayagoitia y Cossío Díaz y que, por tanto, aquéllos que se encuentran a favor de la procedencia de la referida omisión podrían estimar fundado el concepto de violación respectivo al carecer de reglas específicas para tales situaciones, sin que sea conveniente que el Pleno fije dichas reglas.

El señor Ministro Franco González Salas precisó que el recuento se realiza durante el cómputo y puede resultar de una irregularidad generalizada o de las actualizadas en casillas individuales, señalando que en todo caso, el vicio de las normas respectivas es por falta de certeza, no por omisión. Además, propuso que se precisen reglas muy genéricas sobre el mínimo indispensable exigible a los Estados, como podrían ser el que deberán establecer los mecanismos para los recuentos y los supuestos generales en que éstos proceden.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea indicó que efectivamente no existen reglas para llevar a cabo el recuento total de votos. Consideró que éste se lleva a cabo durante el proceso de cómputo y que si bien en sede jurisdiccional se cuenta con los elementos mínimos, lo cierto es que el hecho de existir dudas al respecto, sería suficiente para considerar que no se encuentra reglamentada tal situación.

Agregó que a los tribunales es necesario dejarles un marco abierto que permita atender a las particularidades que presenta la realidad.

Por otro lado, estimó que se presenta un problema técnico sobre la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra omisiones legislativas, siendo necesario conocer cómo se van a pronunciar los señores

*Sesión Pública Núm. 8*

*Martes 19 de enero de 2010*

Ministros Franco González Salas y Luna Ramos, para llegar a una solución congruente.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia precisó que la propuesta del señor Ministro Franco González Salas consiste en que la ley no contiene reglas claras y precisas sobre el recuento de votos, por lo que basándose en el principio de certeza, debía cambiarse el sentido de la respuesta al concepto de invalidez.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que de estimar que no se trata de una omisión legislativa, se estaría frente a una omisión contraria a la Constitución que se puede impugnar mediante una acción de inconstitucionalidad. Manifestó que en el caso concreto, el proyecto sostiene que se trata de una omisión legislativa parcial. Recordó lo previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso i), constitucional, respecto al sistema de medios de impugnación para el acto que se aparte de las reglas previstas en la ley y sean revocables mediante el medio de impugnación correspondiente.

En ese orden de ideas, sostuvo que podrían generarse dos interrogantes importantes: la existencia de dichos supuestos para la realización en ámbitos administrativo y jurisdiccional de los recuentos de votos totales y parciales; y, la existencia de las reglas para tal fin. Al respecto estimó que no existen las referidas reglas y, por ende, es fundada la

*Sesión Pública Núm. 8*

*Martes 19 de enero de 2010*

omisión legislativa conforme a los precedentes que se han resuelto.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que conforme a lo previsto en el artículo 14 constitucional, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento y los legisladores deben determinar cómo se desarrolla éste, mientras a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde analizar su constitucionalidad; sin embargo, sería útil dejar alguna mención genérica del por qué es omisivo y contra qué se contrasta, es decir, no se sabe quiénes son, por ejemplo, las partes legitimadas, pudiendo agregarse la mecánica del procedimiento a seguir. Así, se manda un mensaje, sin comprometer al Legislador local.

El señor Ministro Aguilar Morales manifestó compartir la apertura de las facultades que se otorguen a un Tribunal; sin embargo, en el caso particular, atendiendo a lo previsto en la Constitución General, es necesario que el legislador local indique con precisión las reglas y supuestos para llevar a cabo los recuentos en comento, siendo conveniente precisarlo en el engrose respectivo para dar directrices mínimas al propio legislador.

El señor Ministro Valls Hernández estimó que en el caso concreto existe una deficiente regulación o bien omisión legislativa parcial, siendo necesario que el Legislador local lo corrija en términos del artículo 116,

fracción IV, de la Constitución Federal, que sería el límite al cual, éste Alto Tribunal, podría llegar únicamente.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas precisó que la cuestión a dilucidar es si la invalidez deriva de una omisión legislativa o de una deficiencia que provoca una violación a principio de certeza.

El señor Ministro Silva Meza estimó que efectivamente se presenta una omisión legislativa que afecta al principio de certeza y si el mandato del artículo 116 constitucional es preciso, es posible considerar que la norma impugnada implica un desacato a un mandato constitucional, existiendo la obligación de cumplir con éste. Por ende, se manifestó a favor del proyecto sin que exista inconveniente de que se fijen reglas mínimas que permitan al legislador ejercer su libertad de configuración.

El señor Ministro Gudiño Pelayo precisó que una norma puede impugnarse por lo que prevé o lo que deja de regular. En este último caso consideró que se trata de una “omisión legislativa parcial”, porque parte de la existencia de una norma deficientemente regulada. En cuanto al recuento total en sede administrativa se ha propuesto que la deficiencia de la regulación origina la falta de certeza por la imprecisión de los términos usados, aunado a que sería un motivo de invalidez.



Además, indicó carece de reglas, por lo que habría que construir un argumento con los supuestos que sí están previstos y establecer las reglas mínimas, lo que se añadiría en el engrose.

El señor Ministro Franco González Salas mencionó que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone en su artículo 295, tres supuestos para realizar el recuento, lo que revela el amplio universo de reglas que pueden existir. Ante ello, sugirió que se vote primero si existe o no la omisión legislativa y de existir la mayoría se allanaría a esa decisión, elaborando voto concurrente. En ese contexto, se podría votar cómo debe engrosarse el asunto con las respectivas reglas mínimas, lo que podría dar salida al asunto y no retrasar su resolución.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó que estaría por la invalidez de los artículos 211 y 38 bis de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral al no prever las reglas claras en cuanto llevar a cabo el recuento de votos.

Sometida a votación provisional la propuesta, por mayoría de siete votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Silva Meza se determinó preliminarmente que existe omisión legislativa. Los señores Ministros Luna

*Sesión Pública Núm. 8*

*Martes 19 de enero de 2010*

Ramos, Franco González Salas, Aguilar Morales y Presidente Ortiz Mayagoitia votaron en contra considerando los dos últimos que se trata de una deficiencia legislativa.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia indicó que para los señores Ministros que consideran que existe omisión legislativa surge la disyuntiva de dejar sin materia el agravio por la reforma de septiembre que superó a la anterior, o si se debe abordar el fondo de éste.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea expresó que a pesar de la reforma, el consenso de quienes habían votado a favor de la omisión legislativa y también los que se pronunciaron por la deficiencia de la misma, lo hicieron tomando en cuenta dicha reforma.

El señor Ministro Gudiño Pelayo aclaró, en relación a la omisión legislativa, que sostiene lo propuesto en el proyecto, añadiendo lo considerado por el señor Ministro Presidente, respecto al recuento de votos en sede administrativa total, modificando su propuesta original.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que el artículo 274 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales define como escrutinio y cómputo al procedimiento mediante el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan el número de electores que votó en ésta; el número de votos

emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; el número de votos nulos; y, el número de boletas sobrantes de cada elección. Posteriormente, define el término de votos nulos, boletas sobrantes y señala que la exclusión de cómputos se llevará a cabo por el Presidente, los senadores y finalmente, los diputados, entre otros, con lo que concluye que dicho ordenamiento es omiso en cuanto a lo relativo al recuento de votos en sede administrativa.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló la importancia de definir el mínimo posible para corregir la deficiencia legislativa y propuso que el Resolutivo Sexto quedara en los siguientes términos: “Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa el Congreso del Estado de Quintana Roo, consistente en regular de manera deficiente los supuestos y las reglas de los recuentos parciales y totales en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, previsto en el inciso I) de la fracción IV del artículo 116 constitucional. En consecuencia el órgano de esa entidad deberá legislar a la brevedad posible para corregir la deficiencia expuesta, antes de la celebración de la jornada electoral en términos del Considerando Décimo de este proyecto”.

El señor Ministro Presidente manifestó su inquietud respecto a si siete votos son suficientes para declarar una omisión legislativa y vincular al Congreso del Estado para legislar en la materia.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea manifestó que al parecer existía un consenso respecto a que los preceptos impugnados son inconstitucionales por omisión legislativa o, por deficiencia, por lo que sugirió que se votara por la inconstitucionalidad del precepto y posteriormente por sus efectos para que el Congreso de la entidad corrija en un sentido o en otro.

El señor Ministro Gudiño Pelayo resaltó la dificultad de la propuesta para determinar qué porciones debían declararse inválidas, ya que estimó excesivo declarar la invalidez del artículo completo pues impactaría de manera negativa al proceso electoral.

El señor Ministro Aguirre Anguiano estimó que se tenía unanimidad respecto a la existencia de ausencias, sea por legislación deficiente o por ausencia legislativa; así como respecto a la inconstitucionalidad del precepto impugnado.

El señor Ministro Cossío Díaz recordó la importancia de declarar que la norma carece de ciertos elementos y de la determinación de un plazo razonable para el cumplimiento de la sentencia.

Agregó que, conforme a lo previsto en la fracción II del artículo 105 constitucional y en la fracción IV del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de la materia podría no requerirse

*Sesión Pública Núm. 8*

*Martes 19 de enero de 2010*

una mayoría de ocho votos para vincular al legislador para que en un plazo razonable cumpla con lo establecido en la Constitución.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia manifestó su preocupación sobre la naturaleza de las sentencias de invalidez dictadas en una acción de inconstitucionalidad, ya que la potestad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es declarar la invalidez de la norma, lo que no tiene ejecución material, cuestionando si, ante el incumplimiento de la sentencia se separaría a los integrantes del Congreso y se les consignaría.

Por tanto, consideró que en el caso concreto, es conveniente expulsar las normas defectuosas para dejar al legislador local sin un procedimiento de cómputo y escrutinio, y provocar que aquél tenga que completar la ley respectiva.

Recordó que desde la propia Constitución General se han dado plazos para que el legislador emita determinada regulación y a pesar de ello no se han cumplido.

El señor Ministro Aguirre Anguiano manifestó que las sentencias de invalidez en las acciones de inconstitucionalidad sí pueden tener una consecuencia de condena y consideró que la responsabilidad social de las

*Sesión Pública Núm. 8*

*Martes 19 de enero de 2010*

legislaturas consiste en cumplir con los lineamientos previstos en la propia Constitución.

El señor Ministro Aguilar Morales manifestó que existe unanimidad de votos sobre la invalidez de diversos preceptos por la deficiencia que presentan sobre su regulación y señaló que valdría la pena agregar los efectos que planteaba el señor Ministro Cossío Díaz en relación con el Resolutivo Sexto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea indicó la importancia de resolver el tema relativo a la omisión legislativa o a la deficiencia que provoca la violación al principio de certeza, además, precisó que en relación con el cumplimiento de las sentencias que declaran la invalidez de determinados preceptos, se trata de un problema de cultura política sin que las medidas a imponer puedan ser un obstáculo para su cumplimiento y manifestó que se sumaría a la mayoría que estima que se está frente a una omisión legislativa.

Además, estimó que las acciones de inconstitucionalidad son procedentes contra omisiones legislativas parciales, en la inteligencia de que si se aceptara que es un pronunciamiento de condena y obligatorio por una mayoría no calificada, se generaría una distorsión al sistema, por lo que consideró conveniente dejar para una mejor ocasión el pronunciamiento sobre la votación que se

requiere para que surta efectos una sentencia de invalidez por una omisión legislativa.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas estimó que sí existe una deficiente regulación que implicaría declarar la invalidez de la norma y manifestó la importancia de determinar los efectos que se debían dar a tal declaración para vincular al Congreso del Estado a legislar al respecto.

El señor Ministro Cossío Díaz manifestó que con independencia de estimar que se trata de omisiones legislativas o de deficiencia que implica violaciones al principio de certeza, debía determinarse qué obligaciones debía de cumplir el Congreso Local para subsanarlas, en la inteligencia de que se está partiendo de diversas posiciones, y se mantendría a favor de la omisión legislativa y de la posibilidad de que existan acciones de condena derivadas de ésta, por lo que propuso que se votara el resolutivo sexto en los términos planteados.

El señor Ministro Valls Hernández señaló la coincidencia respecto a que existe una violación o desacato a la Constitución, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podía permanecer impasible o indiferente ante tal situación. En ese tenor, se manifestó a favor del proyecto en este punto, con las adiciones a que hace referencia el señor Ministro Cossío Díaz.

El señor Ministro Gudiño Pelayo manifestó que existen precedentes relativos a que una mayoría no calificada ha declarado omisiones declarativas. Con independencia de lo anterior estimó necesario que el Tribunal Pleno se pronunciara sobre qué artículos debían declararse inválidos por violación al principio de certeza.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia recordó que existe un precedente en los que por mayoría de siete votos el Tribunal Pleno determinó que las declaraciones de existencia de una omisión legislativa en una acción de inconstitucionalidad requieren de ocho votos para que surtan efectos jurídicos.

La señora Ministra Luna Ramos propuso que, tomando en cuenta que los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Aguilar Morales no integraban el Pleno cuando se votó el referido asunto y otros manifestaban su voluntad para cambiar su opinión, se votara sobre si bastan siete votos para establecer la obligatoriedad de una omisión legislativa y, en caso de que se obtuviera una votación contraria, se debería determinar respecto de los artículos específicos como son el 262, fracción II, y 232 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo en relación con la omisión en sede administrativa y; el artículo 38 bis de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con la omisión legislativa en sede jurisdiccional, para proponer,



en todo caso, el sobreseimiento por lo que hace a dicha omisión.

El señor Ministro Franco González Salas señaló que con su propuesta inicial se habían polarizado las posiciones que se tenían sobre el asunto, de manera que, siguiendo el criterio de la señora Ministra Luna Ramos, estimó que era necesario determinar si se abandona el relativo a la necesidad de ocho votos para determinar la existencia de una omisión legislativa y, que se votara el texto del resolutivo sexto al que se dio lectura, lo que podría llevar implícito que se modifique el criterio antes mencionado.

El señor Ministro Valls Hernández manifestó que en el caso de la acción de inconstitucionalidad 29/2009 se determinó, en el punto resolutivo octavo declarar fundada la omisión legislativa del Congreso del Estado de Aguascalientes en relación con la celebración de convenios entre el Instituto Electoral de la entidad y el Instituto Federal Electoral. En consecuencia, en ese asunto, se determinó que el órgano legislativo de la entidad federativa legislara a la brevedad para corregir la deficiencia apuntada, mientras el Instituto Estatal Electoral quedaba facultado para celebrar convenios asentados en la resolución, lo que en su momento, fue aprobado por mayoría de ocho votos de los señores Ministros.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia indicó que en aquél caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultó al Consejo Electoral del Estado para celebrar convenios por aplicación directa de la Constitución, ahora, en el caso concreto se analiza un problema es diverso al no existir la necesidad de construir ni dar reviviscencia a una norma, de manera que se opone a la sentencia de condena en una acción de inconstitucionalidad, estimando que el resolutivo sexto podría ajustarse para señalar: “En consecuencia, es responsabilidad de ese órgano legislativo, legislar a la brevedad posible para corregir la deficiencia apuntada”.

Manifestó que por lo regular las legislaturas locales cumplen las sentencias de este Alto Tribunal debiendo valorarse las consecuencias de vincular al legislador local a purgar la omisión respectiva.

El señor Ministro Aguirre Anguiano indicó compartir la complejidad del asunto, debiendo reconocerse que algunas legislaturas no cumplen las sentencias de este Alto Tribunal y agregó que todo puede tener solución con voluntad política.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea manifestó la conveniencia de votar el nuevo resolutivo que propone el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia ya que logra

consensuar ambas posturas, dejando la responsabilidad en el legislador local.

El señor Ministro Silva Meza manifestó que están pendientes algunas cuestiones de resolver, recordando que lo planteado es la existencia de omisiones en la ley impugnada y una vez reconocidas éstas no debería realizarse un pronunciamiento respecto de alguna norma específica. En cuanto al reconocimiento de la omisión, ello implica que es fundado el concepto de invalidez por una regulación deficiente, lo que tal vez no amerite la votación calificada sino una mayoría simple, en tanto que otro problema será realizar una declaratoria de inconstitucionalidad, por lo que propuso, en principio, reconocer la existencia de una omisión legislativa, en tanto que sus alcances se reflejarán en un punto resolutivo que no será vinculatorio, con lo que se da un contenido que no requiere una votación mayoritaria calificada.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia propuso que se votara el referido punto resolutivo para quedar en los siguientes términos: “Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Quintana Roo, consistente en regular de manera deficiente, los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en el ámbito jurisdiccional y administrativo, prevista en el inciso I) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución General de la República. En

consecuencia, es responsabilidad de ese órgano legislar a la brevedad posible para corregir la deficiencia apuntada, antes de la celebración de la jornada electoral estatal”.

El señor Ministro Cossío Díaz agregó que debía especificarse en términos de qué considerando se haría la corrección para establecer los mínimos de supuestos y reglas como directriz para el Congreso del Estado, propuesta que fue apoyada por el señor Ministro Aguirre Anguiano.

El señor Ministro Franco González Salas también apoyó la propuesta relativa a establecer los mínimos supuestos y reglas y, manifestó que votaría en contra de la omisión legislativa y de la existencia de una condena y plazo, por lo que señaló que se separaría de la propuesta.

El señor Ministro Presidente señaló que no se trata de la fijación de un plazo, sino de una permisión para hacerlo fuera del plazo señalado en la propia Constitución, toda vez que la ley electoral que sufra modificaciones deberá publicarse al menos con noventa días de anterioridad al proceso electoral, y se está extendiendo el plazo para que se cumpla con la obligación de la Constitución Federal respecto a la omisión.

El señor Ministro Aguilar Morales agregó que no significa que no se esté dentro de los plazos legales y señaló que debía especificarse si se le autoriza fuera de tal plazo,

bajo qué plazo deberá legislarse, por lo que el señor Ministro Presidente señaló que la propuesta debía votarse en los siguientes términos “para corregir la deficiencia apuntada, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución”.

Sometida a votación la propuesta, por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia se aprobó el resolutive respectivo en los siguientes términos: “Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Quintana Roo consistente en regular de manera deficiente los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en los ámbitos administrativo y jurisdiccional prevista en el inciso I) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución General de la República. En consecuencia es responsabilidad de ese órgano legislar a la brevedad posible, para corregir la deficiencia apuntada, en los términos indicados en el considerando último de esta resolución”, con la consideración de que la Legislatura del Estado de Quintana Roo puede válidamente modificar lo previsto en la legislación electoral en cuanto a los recuentos totales o parciales aun sin la anticipación de noventa días al inicio del proceso electoral, a que se refiere la fracción II del artículo 105 constitucional y que en el engrose se desarrollen las

consideraciones relativas a los supuestos y a las reglas mínimas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado inciso I) de la fracción IV del artículo 116 constitucional; los señores Ministros Aguirre Anguiano y Cossío Díaz estimaron además que en las acciones de inconstitucionalidad sí pueden dictarse sentencias de condena; el señor Ministro Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente; y los señores Ministros Luna Ramos y Franco González Salas votaron porque es improcedente la acción de inconstitucionalidad en contra de omisiones legislativas y reservaron su derecho para formular voto de minoría.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia consideró que se habían agotado los temas, puesto que la expulsión de la norma surte efectos a partir de la notificación de los resolutivos, agregó que en cuanto a la omisión legislativa se le permite al Congreso Local para que legisle antes de la jornada electoral, como permisión y no con un plazo. Asimismo, le cedió la palabra a la señora Ministra Luna Ramos para que les expresara el sentido de sus votos de la sesión anterior.

La señora ministra Luna Ramos manifestó que por lo que hace a la votación correspondiente al artículo 137, párrafos tercero y cuarto de la Ley Electoral votaría en contra, en virtud de que dada la interpretación conforme

donde se determinó que se extendía el artículo a todos los funcionarios municipales, estatales y federales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que estuvieran en la prohibición de hacer propaganda en la época de la jornada electoral; sin embargo, expresó que no está de acuerdo con la interpretación conforme puesto que de acuerdo con diversos criterios del Tribunal Pleno, como los que al rubro dicen: “NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA.” y “TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS”, a su parecer no se ajustan con esta interpretación conforme, pues si se está estableciendo este criterio para el derecho administrativo sancionador y se está diciendo que no se puede establecer una interpretación conforme en materia de tipicidad, tampoco se puede establecer una interpretación conforme respecto al citado artículo 137, puesto que no se está determinando de manera precisa a los titulares de estos órganos gubernamentales.

Por tanto, se manifestó en contra de reconocer la validez del artículo 137, párrafos tercero y cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo; a favor de la propuesta de reconocer la validez del artículo 81 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo; en contra de la propuesta de reconocer la validez del artículo 109, fracción I,

*Sesión Pública Núm. 8*

*Martes 19 de enero de 2010*

inciso b) de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo; y a favor de las propuestas de reconocer la validez del párrafo cuarto del artículo 144 y del párrafo tercero del artículo 271 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo; y de declarar la invalidez de la fracción II, del artículo 87, en la porción normativa que señala: *“para precampañas y campañas”* y del párrafo segundo del artículo 271 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo.

A las doce horas con cuarenta minutos el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia decretó un receso y la sesión se reanudó a las trece horas con cinco minutos.

El señor Ministro Presidente señaló que el considerando relativo a los efectos de la acción de inconstitucionalidad se encuentra superado a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado.

La señora Ministra Luna Ramos recordó las participaciones de la sesión anterior en relación con el numeral impugnado, por lo que se determinó declarar la invalidez del artículo 271, párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo y reconocer la validez de su párrafo tercero.

El secretario general de acuerdos dio lectura a las votaciones obtenidas en la sesión anterior.



En ese tenor, los resolutivos se aprobaron por unanimidad de votos en los siguientes términos:

“PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 39/2009 a que esta resolución se refiere.

SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 49 y 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 88, fracción VIII y 89 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral, ambas del Estado de Quintana Roo; y en cuanto a los artículos Segundo y Noveno Transitorios del “Decreto número 100” por el que se reformaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 49, fracciones II, parte última y III, numeral 6, parte última, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; y 74, 81, 109, fracción I, inciso b), 137, párrafos tercero y cuarto; 144, párrafo cuarto y 271, párrafo tercero, de Ley Electoral del Estado de Quintana Roo.

CUARTO. Se declara la invalidez de la fracción II del artículo 87 en la porción normativa que señala: “para precampañas y campañas” y del párrafo segundo del artículo 271 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo.

QUINTO. Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Quintana Roo consistente en

regular de manera deficiente los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en los ámbitos administrativo y jurisdiccional prevista en el inciso I) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución General de la República. En consecuencia es responsabilidad de ese órgano legislar a la brevedad posible, para corregir la deficiencia apuntada, en los términos indicados en el considerando último de esta resolución.

SEXTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo”.

Además, se acordó por unanimidad de votos que las declaraciones de invalidez surtirán efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Quintana Roo.

El señor Ministro Presidente declaró que el asunto se resolvió en los términos señalados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

**IV. 60/2009 Y  
SU  
ACUMULADA  
61/2009**

Acción de inconstitucionalidad número 60/2009 y su acumulada 61/2009, promovida por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, en contra de los

Sesión Pública Núm. 8

Martes 19 de enero de 2010

Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato, demandando la invalidez del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, reformado mediante Decreto 255, Año XCVI, Tomo CXLVII, Número 134, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el veintiuno de agosto de dos mil nueve. En el proyecto formulado por el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández se propuso: *“PRIMERO.- Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO.- Se reconoce la validez del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, reformado mediante Decreto 255, Año XCVI, Tomo CXLVII, Número 134, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el veintiuno de agosto de dos mil nueve. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”*.

El señor Ministro ponente Valls Hernández expuso una síntesis de los considerandos de su proyecto en cuanto sustentan las propuestas contenidas en los puntos resolutivos.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la estimación del Tribunal Pleno los considerandos primero, competencia; segundo, oportunidad de la presentación de la demanda; tercero, legitimación de quienes promueven; y cuarto, causas de Improcedencia.

El señor Ministro Cossío Díaz propuso que en la foja cuarenta y cinco del proyecto se indique que el hecho de que en el escrito de demanda no se señale la totalidad de las autoridades demandadas no provoca la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, ya que en el proyecto se propone un estudio complejo que se sustenta en los artículos 59 y 61 de la ley reglamentaria de la materia, sin que sea necesario abordar en esta ocasión el tema relativo a si el órgano legislativo constituyente local se integra incluso por los ayuntamientos.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia señaló que dicha propuesta implicaría pronunciarse sobre por qué no se llamo a todos los Ayuntamientos, recordando que al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2001 se determinó que la representación del órgano legislativo reformador de la Constitución le corresponde al Congreso estatal.

A su vez el señor Ministro Cossío Díaz recordó que al resolver la controversia constitucional 32/2007 se determinó que los ayuntamientos sí forman parte del constituyente local.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia mencionó que en el caso del Poder Revisor de la Constitución se ha sostenido que no es necesario llamar al juicio a todas las legislaturas locales ya que dicho órgano es representado por

el Congreso de la Unión, sin menoscabo de que se deba llamar a las legislaturas cuando se les atribuyan vicios propios, por lo que el mismo criterio puede sostenerse respecto de los Ayuntamientos en el caso del constituyente local. El señor Ministro Cossío Díaz propuso se plasmaran esas consideraciones en el proyecto, lo que fue aceptado por el señor Ministro Valls Hernández y aprobado por el Tribunal Pleno por unanimidad de votos.

En votación económica, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia se aprobó la propuesta modificada del proyecto contenida en los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto por lo que se refiere a los aspectos de competencia, oportunidad de la demanda, legitimación y estudio de causas de improcedencia.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la estimación del Tribunal Pleno el considerando quinto, estudio de fondo, en cuanto sustenta la propuesta contenida en el punto resolutivo SEGUNDO del proyecto, en el sentido de reconocer la validez del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, reformado mediante Decreto 255, Año XCVI, Tomo CXLVII, Número 134, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el

veintiuno de agosto de dos mil nueve, en el cual fue suprimida la figura de la candidatura común, y se establece que los partidos políticos tienen el derecho exclusivo de postular candidatos por sí mismos o a través de coaliciones, en tanto que no viola el artículo 9o. de la Constitución Federal, pues la garantía de libre asociación que ahí se consagra no puede traducirse en un derecho constitucional a formar candidaturas comunes, en atención a que debe distinguirse el derecho de asociación del individuo como tal, del derecho de los partidos políticos a recurrir a determinadas formas asociativas, lo cual, compete regular a las legislaturas locales, pues en términos del artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal corresponde al legislador ordinario regular las formas mediante las cuales los partidos políticos podrán asociarse, siempre y cuando dicha regulación no resulte arbitraria, innecesaria, desproporcionada o incumpla con criterios de razonabilidad.

El señor Ministro Gudiño Pelayo solicitó ajustar las consideraciones del proyecto para sostener que debían eliminarse las relativas a que la supresión de las candidaturas comunes no hacen nugatorio el derecho de asociación, pues conforme al marco legal se establece la figura de la coalición, así como la referente a la actuación del Congreso Local respecto a que razonó exhaustivamente los motivos por los cuales decidió excluir del marco estatal las candidaturas comunes.

Lo anterior, en virtud de que de prevalecer las consideraciones del proyecto se daría a entender la idea de que la norma fue constitucional ya sea por la previsión de coaliciones, a pesar de la eliminación de las candidaturas comunes o porque de haber sido una supresión razonada en el proceso legislativo, cuando no es así, ya que para su validez se basta que el legislador hubiere ejercido su libertad de configuración.

Estimó que no pasa inadvertido el planteamiento de los promoventes en cuanto a que el artículo impugnado trasgrede la libertad de asociación en materia pública, el cual puede responderse mencionando que la falta de estatus constitucional que se alega, así como la libertad configurativa del legislador para de allí derivar lo innecesario o inaplicable del estándar de razonabilidad en el caso concreto.

El señor Ministro Valls Hernández manifestó respecto de las propuestas del señor Ministro Gudiño Pelayo en cuanto a establecer matices en el proyecto en relación con los argumentos que se dan para sostener que la supresión de las candidaturas comunes no es inconstitucional en tanto que están previstas las coaliciones en la legislación impugnada, que tal determinación se deriva del criterio sostenido por el Pleno respecto a que es libertad del legislador local configurar la manera en que opera el derecho

de asociación tratándose de partidos políticos, así como la regulación de la forma en la que pueden asociarse siempre que no resulte arbitraria, innecesaria, desproporcionada o incumpla con criterios de razonabilidad, por lo que sostendrá su proyecto.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia mencionó que en el proyecto se cita la tesis que lleva por rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 33, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE FORMAR COALICIONES TOTALES POR TIPOS DE ELECCIÓN, NO TRASGREDE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9 Y 41”, recordando que en la diversa acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008, se destacaron las diferencias entre la candidatura común y las coaliciones, y se determinó que la sustracción de aquélla figura es constitucional, por lo que sugirió se invoque este precedente en el engrose para redondear su propuesta.

El señor Ministro Aguirre Anguiano manifestó que en las fojas de la a la sesenta y ocho y setenta y seis se transcriben comparecencias siendo ello innecesario, lo que se aceptó por el señor Ministro Ponente Valls Hernández.

La señora Ministra Luna Ramos mencionó la importancia de tomar en cuenta lo indicado en la opinión de



la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual señaló que si bien se suprimieron algunos artículos del Código Electoral en el que se están regulando esas candidaturas comunes, no se prohíben, por lo que se mantiene la posibilidad de que las propongan.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia indicó la relevancia de la interpretación de la ley respectiva, estimando que están prohibidas en el Estado de Guanajuato las candidaturas comunes ya que existe la regla de registro de candidatos respecto a que no deben haberse registrado por un diverso partido político, por lo que debería existir autorización expresa para tal fin.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que en el caso Castañeda se destacó que se trataba de una configuración legal, por lo que si el legislador no señala que no existen las candidaturas independientes, deberían existir explícitamente en el ordenamiento respectivo.

El señor Ministro Aguilar Morales indicó que se garantiza la libertad de asociación mediante el mecanismo de coaliciones siempre que esté garantizado porque así lo considera el Estado; además, solicitó agregar la tesis jurisprudencial que lleva por rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. ASPECTOS A LOS QUE ESTÁ CONDICIONADA LA LIBERTAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ESTABLECER LAS MODALIDADES

Y FORMAS DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES LOCALES”, lo que suma argumentos a lo indicado en el proyecto, lo que se aceptó por el señor Ministro Ponente Valls Hernández, el cual manifestó que si ya no están en la ley reguladas las candidaturas comunes eso implica que ya no están permitidas dadas las complicaciones que suscitaban lo que fue tomado en cuenta por el legislador, por lo cual estimó innecesario hacer referencia a la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La señora Ministra Luna Ramos retiró su observación.

En votación económica se aprobó por unanimidad de once votos la propuesta del proyecto modificada consistente en reconocer la validez del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, reformado mediante el Decreto 255. Los señores Ministros Cossío Díaz y Gudiño Pelayo reservaron su derecho para formular voto concurrente.

El señor Ministro Presidente declaró que el asunto se resolvió en los términos señalados, concluyó la sesión a las trece horas con cincuenta minutos y convocó al Tribunal Pleno para la sesión pública que se celebrará el jueves veintiuno de enero del año en curso a las once horas.

*Sesión Pública Núm. 8*

*Martes 19 de enero de 2010*

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.